

Señor:
JUEZ ADMINISTRATIVO DE PEREIRA (REPARTO)
E. S. D.

REFERENCIA : REPARACIÓN DIRECTA.
DEMANDANTE : HELMER CAMACHO RESTREPO Y OTROS.
DEMANDADOS : LA NACIÓN-RAMA JUDICIAL-FISCALIA
GENERAL DE LA NACIÓN.

JULIÁN ANDRÉS ESPAÑA PIÑEROS, abogado, ejerciendo el mandato especial que me han otorgado los señores **HELMER CAMACHO RESTREPO, ADRIANA NOREÑA, JORGE LUIZ CAMACHO CAÑAVERAL, MELISSA CAMACHO JARAMILLO, MARCELA CAMACHO MURILLO y VALENTINA CAMACHO NOREÑA**, en ejercicio del Medio de Control de **REPARACIÓN DIRECTA** de que trata el Artículo 140 del Códigode Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, instauro demanda en contra de **LA NACIÓN-RAMA JUDICIAL**, representada por el Director Ejecutivo de Administración Judicial, Dr. **JUAN CARLOS YEPES ALZATE**, o por quien haga sus veces, con domicilio principal en las ciudad de Bogotá, quien se notifica a través del Director Seccional, Dra. . **CLARA INES RAMIREZ SIERRA**, o por quien haga sus veces; y, **LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN**, representada por el señor Fiscal **NESTOR HUMBERTO MARTINEZ**, o por quien haga sus veces, quien se notifica a través del Director Administrativo Seccional de Fiscalías, Dra. **MARTHA JANET MANCERA**, o por quien haga sus veces, con el fin de que se declare a través de sentencia la responsabilidad patrimonial de las citadas entidades, por los perjuicios sufridos a consecuencia de la detención y consecuente privación injusta de la libertad del señor **HELMER CAMACHO RESTREPO**, a consecuencia de ello, se concedan las pretensiones que a continuación formularé.

DETERMINACIÓN DE LAS PARTES

DEMANDANTE: La constituyen las siguientes personas naturales: Los señores **HELMER CAMACHO RESTREPO, ADRIANA NOREÑA, JORGE LUIZ CAMACHO CAÑAVERAL, MELISSA CAMACHO JARAMILLO, MARCELA CAMACHO MURILLO y VALENTINA CAMACHO NOREÑA**, todos mayores de edad, quienes actúan en nombre propio., identificados como aparecen al pie de sus firmas en el poder otorgado para actuar, domiciliados en el municipio de Pereira (Risaralda), hijos y compañera permanete.

Su interés jurídico radica en que son los titulares del derecho subjetivo vulnerado con el actuar de las entidades demandadas que representaban a la Administración el día de los acontecimientos, son quienes padecieron y padecen actualmente el sufrimiento generado por la privación injusta de la libertad.

DEMANDADA: Está constituida por **LA NACIÓN-RAMA JUDICIAL**, representada por el Director Ejecutivo de Administración Judicial, Dr. **JUAN CARLOS YEPES ALZATE**, o por quien haga sus veces, con domicilio principal en las ciudad de Bogotá, quien se notifica a través del Director Seccional, Dra. **CLARA INES RAMIREZ SIERRA**, o por quien haga sus veces; y, **LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN**, representada por la

señora Fiscal **NESTOR HUMBERTO MARTINEZ**, o por quien haga sus veces, quien se notifica a través del Director Administrativo Seccional de Fiscalías, Dra. **MARTHA JANET MANCERA**, o por quien haga sus veces.

Son las entidades de carácter administrativo, cuya responsabilidad patrimonial, derivada de su actuar, se demanda, habida cuenta que eran las entidades encargadas de cancelar las ordenes de captura que se hallaran vigentes en contra del actor.

HECHOS Y OMISIONES FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN

PRIMERO: El señor **HELMER CAMACHO RESTREPO** fue sometido a un penoso juicio por el delito de ***"HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO, Y, CONCIERTO PARA DELINQUIR"***.

SEGUNDO: Con fundamento en la acusación la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, levantó cargos en contra del señor **HELMER CAMACHO RESTREPO** y solicitó su detención preventiva, como medida de aseguramiento.

TERCERO: El señor **HELMER CAMACHO RESTREPO** fue privado de la libertad el día 27 de agosto de 2014, situación que se extendió hasta el día 23 de enero de 2015, a órdenes del **JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL** del municipio de Buga.

CUARTO: El proceso penal se llevó a cabo ante el **JUZGADO PRIMERO PENAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO** de la ciudad de Buga (Valle del Cauca), donde se desarrolló el juicio oral.

QUINTO: El señor **HELMER CAMACHO** fue recluido en la cárcel Municipal de Buga (Valle del Cauca).

SEXTO: Luego de más de cuatro (4) meses de privación de libertad el **JUZGADO PRIMERO PENAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO**, deja en libertad al señor **HELMER CAMACHO** al proferir sentencia absolutoria en su favor.

SÉPTIMO: Es así que el día 16 de abril de 2015, se profiere auto interlocutorio, el cual absuelve y decreta la preclusión de la investigación en contra del señor **HELMER CAMACHO RESTREPO**.

OCTAVO: El señor **HELMER CAMACHO RESTREPO** estuvo privado de su libertad de manera injusta desde el día 27 de agosto de 2014 y hasta el día 23 de enero de 2015, esto es, **CUATRO MESES Y VEINTI CUATRO DÍAS**.

NOVENO: El señor **HELMER CAMACHO RESTREPO** tiene, y tenía para la época de los hechos, una relación sentimental con la señora **ADRIANA NOREÑA**, con quien procreó una hija de nombre **VALENTINA CAMACHO NOREÑA**.

DÉCIMO: Además de la joven **VALENTINA CAMACHO NOREÑA**, el señor **CAMACHO RESTREPO**, procreo 3 hijos mas, con los cuales tiene excelentes lazos afectivos, y a los cuales les colabora económicamente.

DUODÉCIMO: Con el fruto del trabajo del señor **HELMER CAMACHO RESTREPO** sobrevivían él, su compañera, y sus hijos, personas con las cuales le une lazos afectivos muy estrechos.

DÉCIMO TERCERO: Desde el momento de la privación de la libertad del señor **HELMER CAMACHO RESTREPO**, los miembros de su familia asumen el sostenimiento y manutención de su hogar, la defensa y el sostenimiento del señor **CAMACHO RESTREPO** en el centro penitenciario.

DÉCIMO CUARTO: Debido a que el señor **CAMACHO RESTREPO** fue recluido en la cárcel municipal de Buga, cada fin de semana la familia se desplazaba desde el municipio de Pereira, donde residían a visitarle, lo que les generaba costos y una insuperable tristeza de verle preso y rodeado de personas no muy respetables.

DÉCIMO QUINTO: El señor **CAMACHO RESTREPO** detentaba muy buenas relaciones afectivas con los miembros de su familia, su esposa y sus hijos.

DÉCIMO SEXTO: Con la privación de la libertad del señor **HELMER CAMACHO RESTREPO** se generaron perjuicios patrimoniales (lucro cesante y daño emergente) y extrapatrimoniales (morales subjetivos y alteración a las condiciones de existencia) que deben ser reparados por las entidades convocadas, pues ésta fue producto de un error judicial, al someterlo a un juicio por un delito que no cometió e imponerle las consecuencias jurídicas del mismo.

DÉCIMO SEPTIMO: El actuar de la **FISCALIA GENERAL DE LA NACION**, al solicitar la privación de la libertad y de la **RAMA JUDICIAL**, a través del **JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE GARANTÍAS**, al no aportar las pruebas suficientes, y al decretar la medida, frente a unos hechos que nunca existieron y que le fueron imputados en un Juicio Oral, al señor **HELMER CAMACHO RESTREPO**, constituye un hecho irregular, una falla en el servicio, generando un daño antijurídico al acto y su familia, por ende, se hace necesario acudir a la vía de la **REPARACION DIRECTA** para lograr el reconocimiento y pago de la indemnización respectiva, para lo cual es requisito de procedibilidad la conciliación prejudicial que se convoca.

DÉCIMO OCTAVO: Los actores convocaron a conciliación prejudicial a la parte accionada sin que se llegara a un acuerdo extrajudicial para el pago de los perjuicios, razón por la cual me han conferido poder especial, amplio y suficiente para que los represente en este proceso.

DÉCIMO NOVENO: La solicitud de conciliación fue radicada ante el Procurador Judicial en Asuntos Administrativos el día 10 de octubre de 2016 y la certificación fue entregada el día 14 de diciembre de 2016, por consiguiente, en acatamiento a lo dispuesto por la Ley 1285 de 2009, se presentó la suspensión de la caducidad de la acción durante este término.

DECLARACIONES Y CONDENAS

Previo el trámite del proceso ordinario contemplado en el Título XXIV del Código Contencioso Administrativo, con fundamento en los hechos, pruebas y normas jurídicas que invoco, solicito se hagan en el fallo las siguientes declaraciones y condenas, o sus equivalentes:

PRIMERA: DECLÁRESE solidaria y administrativamente responsable a **LA NACIÓN-LA RAMA JUDICIAL- FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN**, de los perjuicios causados a los actores por la privación injusta de la libertad del señor **HELMER CAMACHO RESTREPO**, de que dan cuenta los hechos de la presente demanda.

SEGUNDA: CONDÉNESE, en consecuencia, a **LA NACIÓN-LA RAMA JUDICIAL-FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN**, como reparación del daño ocasionado a los actores, **HELMER CAMACHO RESTREPO, ADRIANA NOREÑA, JORGE LUIZ CAMACHO CAÑAVERAL, MELISSA CAMACHO JARAMILLO, MARCELA CAMACHO MURILLO y VALENTINA CAMACHO NOREÑA**, a pagarle a los mismos las siguientes sumas de dinero a título de indemnización de perjuicios, así:

A) En favor del señor **HELMER CAMACHO RESTREPO**, en su calidad de víctima directa de la privación injusta de la libertad:

DAÑOS MATERIALES: La suma de **TRES MILLONES NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS (\$3.092.832.00)**, y se discriminan así:

1. Lucro cesante:

- 1.1.** La suma de **TRES MILLONES NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS (\$3.092.832.00)**, representados en los salarios dejados de percibir durante los ciento cuarenta y cuatro (144) días que estuvo privado de su libertad, a razón de un salario mínimo legal vigente

DAÑO MORAL: Se estiman en la suma de **CIEN SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (100 S.M.M.L.V.)**, al valor que tengan en el momento de realizarse el pago real de la condena.

DAÑO A BIEN CONSTITUCIONAL: Se estiman en la suma de **CIEN SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (100 S.M.M.L.V.)**, al valor que tengan en el momento de realizarse el pago real de la condena.

B) En favor de los señores **ADRIANA NOREÑA, JORGE LUIZ CAMACHO CAÑAVERAL, MELISSA CAMACHO JARAMILLO, MARCELA CAMACHO MURILLO y VALENTINA CAMACHO NOREÑA** (hijos y conyuje)

DAÑO MORAL: En favor de cada uno de ellos se solicita condena en contra de las demandadas por la cantidad de **CIEN SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (100 S.M.M.L.V.)**, al valor que tengan al momento de realizarse el pago real de la condena.

DAÑO A BIEN CONSTITUCIONAL: En favor de cada uno de ellos se solicita condena en contra de las demandadas por la cantidad de **CIEN SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (100 S.M.M.L.V.)**, al valor que tengan al momento de realizarse el pago real de la condena.

TERCERA: La condena respectiva deberá actualizarse de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 92 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo, con base en el índice de precios al consumidor, o al por mayor.

CUARTA: Que la demandada de cumplimiento a la sentencia en los términos señalados por los artículos 195 ibídem.

QUINTA: Condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandada con forme a lo establecido en el Artículo 188 ibídem.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

En ejercicio de la obligación legal de Administrar Justicia se generó un hecho administrativo donde resultó privado de la libertad el señor **HELMER CAMACHO RESTREPO**, lo que ocasionó perjuicios a los actores y, de paso, violó la siguiente normatividad:

El constituyente de 1991, desde **el preámbulo de la Constitución Política** menciona la especial tutela que debe recibir la “integridad personal y **la vida**”, por ello, con el fin de asegurar a los integrantes del pueblo de Colombia “*la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, **la libertad** y la paz*”, promulgó la Carta Política que hoy rige todos y cada uno de los comportamientos de los miembros de la sociedad colombiana.

La Corte Constitucional, en Sentencia C-479 de agosto 6 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández G. y Alejandro Martínez Caballero, al establecer jurisprudencialmente los efectos jurídicos del Preámbulo, manifestaron: “*la concepción jurídica según la cual el derecho no se agota en las normas y, por ende, el constitucional no está circunscrito al limitado campo de los artículos que integran una Carta Política*”, así las cosas, como el preámbulo y su efecto establecen un campo o espacio jurídico no normativo, que constituye el espíritu o querer del constituyente, es decir, el fin último hacia el cual debe propender todo el ordenamiento jurídico colombiano, a razón de que contiene los valores fundantes de la Constitución, éste “*incorpora mucho más allá de un simple mandato específico*” que deben defender todas las personas que integran el Estado colombiano, más aún, quienes integran las Ramas del Poder Público y a favor de aquellos que se hallan vinculados a la defensa del Estado de manera obligatoria.

El Preámbulo da sentido a los preceptos constitucionales y señala al Estado las metas hacia las cuales deben orientar su acción todos los órganos que le integran, es decir “*el rumbo de las instituciones jurídicas*”. Todo esto se vio vulnerado y desconocido de manera flagrante por los entes demandados al privar de manera injusta de la libertad al señor **HELMER CAMACHO RESTREPO**, generando un daño antijurídico. Es deber del Estado asegurar a todas las personas, entre una serie de bienes jurídicos, la libertad personal, dentro de un marco jurídico que garantice un orden justo.

El Artículo 2 de la Constitución Política establece los fines esenciales del Estado colombiano, entre ellos está el enunciado en el inciso segundo de la norma en comento, en virtud del cual, instituye a las autoridades de la República para proteger a los habitantes de Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás, así como en su libertad personal. Las autoridades demandadas, atentaron contra la libertad del señor **HELMER CAMACHO RESTREPO**, al incurrir en una falla del servicio por privarlo de su libertad de manera injusta.

La jurisprudencia nacional ha sido tajante al ordenar el pago de indemnización de perjuicios a quienes padecen daños ocasionados por la privación injusta de la libertad, por cuanto el Estado asume la obligación de reintegrar sano y salvo, en las mismas condiciones en que lo recibió, al ciudadano que comparece a prestar el servicio militar obligatorio.

En relación con la especial protección del derecho a la libertad y la exigencia constitucional de restringirla excepcionalmente por los motivos preexistentes al acto que se imputa, esta Sección dijo lo siguiente:

“Desde la propia preceptiva constitucional, es claro que la libertad personal, como valor superior y pilar de nuestro ordenamiento, es un auténtico derecho fundamental (art. 28 C.P.) que sólo admite limitación "en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley", y como certeramente lo anota la doctrina: "No basta, sin embargo, cualquier norma: es preciso que la norma jurídica que determina los supuestos en que procede la privación de libertad sea una ley. Esta exigencia tiene un fundamento evidente: desde el momento en que la libertad individual es asumida por la sociedad como un principio básico de la organización de su convivencia social, es solo la propia sociedad la que puede determinar los casos que dan lugar a la quiebra de ese principio básico, y esa expresión de la voluntad general de la sociedad tiene lugar a través de la ley. Constitucionalmente, esta exigencia se plasma en otra: la de que sean los representantes del pueblo, libremente elegidos, los que determinen las causas de privación de libertad. La determinación previa de las causas de privación de libertad tiene, además, otra razón material, la de otorgar seguridad jurídica a los ciudadanos, esto es, que los ciudadanos sepan de antemano qué conductas pueden suponer la privación de un bien básico como la libertad. Se trata, con ello, de desterrar la arbitrariedad que caracterizaba al Antiguo Régimen_".

Por lo demás, aunque la detención preventiva emerge como un instrumento válido para el desarrollo del cometido estatal de perseguir los delitos, desde una perspectiva democrática no puede olvidarse que nuestro Estado de derecho reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona (art. 5 C.P.) y, por lo mismo, la constitución, sin ambages, señala, dentro de los fines del Estado, el de garantizar la efectividad de los derechos, entre ellos los de libertad, como ámbitos de autodeterminación de los individuos (art. 2 C.P.), en el marco de aplicación del principio universal de presunción de inocencia (art. 29 ejusdem).

La garantía constitucional de la libertad personal debe interpretarse en armonía con los múltiples tratados internacionales suscritos por Colombia e incorporados a nuestro sistema jurídico de conformidad con lo dispuesto por el artículo 93 C.P... Basta lo expuesto para

advertir que la detención preventiva debe ser entendida como una medida excepcional, que procede sólo cuando sea estrictamente necesaria y proporcionada a los fines propios de la investigación del ilícito a cargo del Estado”¹.

Por su parte, el desarrollo del concepto de privación injusta de la libertad, con base únicamente en la interpretación del Artículo 90 de la Constitución, podría provenir de la definición misma del daño antijurídico, según el cual éste se presentaría cuando la persona que ha sido privada de la libertad no tenía el deber jurídico de soportar tal privación.

En cuanto a la evolución jurisprudencial de la figura de la Privación Injusta de la Libertad, se ha tenido por la Sala Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado, lo siguiente:

“Con ocasión de la interpretación de los Artículos 106 y 121 de la Constitución Española de 1978, por ejemplo, la doctrina de ese país ha considerado que el Estado responde patrimonialmente por funcionamiento anormal y normal de la Administración de Justicia, dentro de este último por: i) error judicial, propio de la responsabilidad subjetiva del Estado y, ii) por prisión provisional, éste que se rige por las reglas de la responsabilidad objetiva y directa del Estado y que opera en los “supuestos de sentencia absolutoria o sobreseimiento libre... y quienes se encuentran sufriendo condena en régimen de libertad condicional”^{2[4]}. Así, respecto de la responsabilidad derivada de la prisión provisional, expresaron lo siguiente:

“No cabe, en efecto, subsumirla en un supuesto de error ni de funcionamiento anormal...

Abundando en aquel primer razonamiento, en verdad no puede considerarse que el instructor de una causa penal haya actuado erróneamente o de modo anormal por el hecho de haber decretado una prisión preventiva cuando, en el momento en que la acuerda, existía una racional y muy fundada creencia de que un hecho delictivo se había producido y la de que éste resultaba imputable a determinada persona, concurriendo, además cuantos requisitos se exigían por la LECr para que la medida cautelar se adoptara. Porque sobre todo cuando ésta es legalmente obligatoria, lo que precisamente constituiría una incorrecta, por ilegal, conducta por parte de la autoridad judicial, sería la no oportuna adopción de tal cautela, cualquiera que sea el fundamento de la misma.”^{3[5]}

En este mismo sentido, en relación con la interpretación del concepto de privación injusta de la libertad y al margen de las

¹ Sentencia del 7 de diciembre de 2004, expediente 14.676

^{2[4]} Jiménez Lechuga, Javier. La Responsabilidad Patrimonial de los Poderes Públicos en el Derecho Español. Editorial Marcial Pons. 1999. Páginas 142 y siguientes.

^{3[5]} Reyes Monterreal, J.M. citado por Jiménez Lechuga, Javier, op. cit. anterior.

normas legales que lo consagran, la Sección Tercera del Consejo de Estado expresó:

"No puede considerarse, en principio, que el Estado deba responder siempre que cause inconvenientes a los particulares, en desarrollo de su función de administrar justicia; en efecto, la ley le permite a los fiscales y jueces adoptar determinadas decisiones, en el curso de los respectivos procesos, en aras de avanzar en el esclarecimiento de la verdad, y los ciudadanos deben soportar algunas de las incomodidades que tales decisiones les causen. Sin embargo, tampoco pueden hacerse afirmaciones categóricas, para suponer que, en determinados casos, será siempre inexistente el daño antijurídico, mucho menos cuando ha habido lugar a la privación de la libertad de una persona, así sea por corto tiempo, dado que se trata de la vulneración de un derecho fundamental, cuya injusticia, al margen de la licitud o ilicitud de la decisión que le sirvió de fundamento, puede hacerse evidente como consecuencia de una decisión definitiva de carácter absolutorio. He aquí la demostración de que la injusticia del perjuicio no se deriva de la ilicitud de la conducta del agente del Estado."^{4[6]}

En este orden de ideas, podría concluirse que la privación injusta de la libertad, como hecho generador del deber del Estado de reparar los daños antijurídicos causados, se produciría no sólo como consecuencia de la falla en el servicio de la Administración de Justicia, régimen subjetivo de responsabilidad-, sino también al margen de la ilicitud o licitud de la decisión, pues basta la antijuricidad del daño que, en este caso, está marcado por la injusticia de la detención al margen de la licitud de la medida judicial."

En síntesis, el daño generado al actor fue antijurídico por no tener la obligación legal de soportarlo, razón por la cual el Estado está llamado a indemnizar y ha de ser éste el régimen aplicable en el presente caso.

Los llamados a juicio deben responder patrimonialmente en virtud del principio "*Damnum quod quis sua culpa sentit, sibi debet, non aliis imputare*" (El daño de propia culpa, impúteselo cada cual a si mismo, no a los demás), habida cuenta que fue la culpa de la administración de justicia la que ocasionó el daño al actor.

Así las cosas, la entidad demandada debe responder por los daños ocasionados a los actores, pues las tendencias legales y jurisprudenciales comparten los argumentos que se colacionan en la presente demanda y están demostrados los elementos que estructuran la responsabilidad extracontractual.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Además de las disposiciones antes citadas y comentadas, invoco como fundamento de derecho de la presente acción las siguientes normas: Artículos 90, 272, 286, 298, 299, 300 y 305 de la Constitución Nacional; Artículo 140, 179 a 186 del Código de

^{4[6]} Sentencia del 25 de enero de 2001, expediente 11413.

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; y demás normas concordantes.

COMPETENCIA

El Honorable Juez es competente para conocer del presente proceso por razón a la calidad detentada por las Entidades demandadas; el factor territorial, teniendo en cuenta que en esta jurisdicción se presentaron los hechos de que trata la demanda; y, además, por la cuantía de las pretensiones citadas anteriormente.

ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA

De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 20 numeral 2 del Código de Procedimiento Civil, la cuantía del presente asunto se determina por el valor de la Pretensión Mayor de la Demanda, la cual es de **CIEN SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (100 S.M.M.L.V.)**.

Este monto es fijado por el demandante de manera racional teniendo en cuenta el sufrimiento, la angustia, el dolor, la injusticia, la desolación, la impotencia y las necesidades que tanto él como su núcleo familiar vivieron en el tiempo en que estuvo privado de la libertad sin que existiera una razón jurídica valedera.

OPORTUNIDAD DE LA ACCIÓN

Se instaure esta acción dentro del término de dos años, contados a partir del día 25 de ENERO de 2015, día siguiente a la fecha en que quedó ejecutoriada la providencia absoluta proferida por el **JUZGADO PRIMERO PENAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO**, como lo exige el Artículo Artículo 164 Numeral 2, Literal i. del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Se aclara que en el presente caso la caducidad de la acción se suspendió en acatamiento a lo dispuesto por la Ley 1285 de 2009, desde el día 10 de octubre de 2016 – fecha en la que se radicó la solicitud de conciliación prejudicial ante el Procurador Judicial en Asuntos Administrativos- y hasta el día 14 de diciembre de 2016 – fecha en que se recibió la certificación del trámite prejudicial.

MEDIOS DE PRUEBA

Para demostrar la ocurrencia de los hechos, la existencia y cuantía de los perjuicios deprecados, le solicito admitir, darle el valor que les corresponde y decretar las siguientes pruebas:

DOCUMENTALES:

1. Registros Civiles de Nacimiento de los hijos del actor.
2. Copia de la cédula de ciudadanía de las personas que constituyen la parte actora.
3. Copia del Certificado de Libertad expedido por el **INPEC**.
4. Sentencia de Primera Instancia, que declara la Preclusión del proceso.
5. Copia del recibido de la presente convocatoria por parte de la entidad convocada.

6. Copia de la Convocatoria a la conciliación y su certificación ante la Procuraduría.

NOTA: Pese a las pruebas allegadas con la presente solicitud, me reservo la facultad de solicitar, presentar y exhibir, otras pruebas diferentes cuando se adelante la demanda de Reparación Directa de no poderse llegar a un arreglo amigable.

OBJETO: Tienen por objeto estos documentos el demostrar la veracidad de los hechos narrados como fundamentos fácticos de la demanda y los lazos de consanguinidad de los actores.

TESTIMONIALES:

1. **JESUS ALONSO GIL**, identificado con la cédula de ciudadanía N° **8.853.527 de Medellín**, quién se citará a través del apoderado del demandante.
2. **NELSON CASTAÑO GONZALEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía N° **10.388.858 de Pereira**, quién se citará a través del apoderado del demandante.
3. **JORGE HERNAN VERA**, identificada con la cédula de ciudadanía N° **10.143.648 de Pereira**, quién se citará a través del apoderado del demandante.

OBJETO: Tienen por objeto los testimonios solicitados, demostrar la ocurrencia de los hechos narrados, la existencia de los perjuicios acaecidos a los actores, y en general, la veracidad de los hechos de la demanda.

PROCEDIMIENTO

El trámite a seguir en el presente proceso será el previsto en el Capítulo VI, Artículos 168 y Sigüientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ANEXOS

1. Los documentos relacionados en el acápite de las Pruebas.
2. El poder especial conferido por los actores para actuar como su apoderado.
3. Una (1) copia de la demanda para el archivo del despacho.
4. Una copia (1) de la demanda y sus anexos para notificar al Ministerio Público.
5. Tres (3) ejemplares de la demanda y sus anexos para el traslado a los demandados.

NOTIFICACIONES Y DIRECCIONES

Las personales las recibiré en la Carrera 7 No. 19-48 Piso 3, Edificio Banco Popular, Pereira. Email: julianespanap@gmail.com

Los demandantes, recibirán notificaciones por intermedio del apoderado.

La parte demanda, recibirá notificación así:

LA NACIÓN-RAMA JUDICIAL, se notifica a través del Director Seccional, **Dra. CLARA INES RAMIREZ SIERRA**, en el Palacio de Justicia, ubicado en la calle 41 entre carrera 7 y 8, Oficina de la Dirección Ejecutiva 106. Correo Electrónico: info@cendoj.ramajudicial.gov.co

LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, se notifica a través del Director Administrativo Seccional de Fiscalías, Dra. **MARTHA JANET MANCERA**, o por quien haga sus veces, Carrera 15 No. 7-16 P-2 Buga – Valle, Teléfono (092) 2371931 – 2371936. Correo Electrónico: jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co

Del señor Juez;

Con Atención:

JULIÁN ANDRÉS ESPAÑA PIÑEROS
C.C. 1.088.291.345 de Pereira
T.P. 244.503 del C.S. de la J.